

**Diego Melo**

## **2013: El año de la protesta social y la represión en Colombia (primera parte)**

**14 de noviembre de 2013**

¿Cómo conseguir lo que la gente quiere de sus gobiernos? Algunos simplemente negocian lo que desean. Estas personas pueden incluir a aquellos con altos cargos en el poder, como por ejemplo, los políticos, los directores de las empresas, los sindicatos con alta influencia política y otros sectores de la población más adinerados.

Imaginen, por ejemplo, que los miembros del Congreso colombiano recibieron aproximadamente 4.000 dólares de regalo de navidad el 4 de octubre del año pasado. El Presidente autorizó el pago porque los sueldos del congreso se han reducido dos veces durante los últimos dos años y los diputados se negaban a discutir y votar importantes leyes en la agenda legislativa. No hace falta decir que, el Congreso se vio recompensado por no hacer su trabajo. El diputado de izquierda, Iván Cepeda dijo que el aumento fue "un privilegio injustificado e innecesario".

Pero, ¿qué pasa con las personas que carecen de acceso directo al poder?

La misma semana en que los miembros del congreso vieron como sus salarios crecían, un grupo de trabajadoras estatales de la salud protestaron en la plaza principal de Bogotá porque el gobierno no les ha dado beneficios mínimos por su trabajo, tales como protecciones laborales y seguridad social. Conocidas como "madres comunitarias", estas mujeres ayudan a criar y educar a los niños desfavorecidos de los barrios más pobres del país y solamente reciben subvenciones cada dos meses, en lugar de ser cubiertos por un régimen de pensiones legales. "Al igual que el Presidente ofrece las primas para el Congreso, ¿por qué no puede llegar y hacer frente a nuestras demandas?", se preguntaban.

Las madres de la comunidad son sólo un ejemplo de un punto de vista marginado políticamente en la población. La falta de acceso directo al poder puede tomar muchas formas, incluyendo trabajadores asalariados en una industria con prácticas laborales deficientes, un trabajador rural en una zona que carece de la mayoría de los servicios sociales básicos, y un grupo indígena que considera que su territorio está cada vez más ocupado por funcionarios militares que están más preocupados por proteger los intereses de las empresas que al pueblo colombiano.

Por lo tanto, ¿que es lo que hace la gente con poco acceso al poder y a la toma de decisiones para conseguir lo que quiere de sus gobiernos?

Toman las calles para protestar. Y protestan vivamente.

De hecho, 2013 ha sido el año de la protesta social en Colombia. Como tal, este artículo es un homenaje a las movilizaciones populares haciendo una revisión de las principales protestas sociales en el año pasado. Es importante que la comunidad internacional sepa las razones de tanta agitación, disidencia y represión en un país que por lo general se considera la democracia más antigua de América Latina.

### **Las protestas: sus demandas y reivindicaciones legítimas**

Las madres comunitarias, los mineros, los cultivadores de café, trabajadores rurales, choferes de camiones, médicos y profesionales de la salud, estudiantes, y otros sectores se lanzaron a las calles para exigir atención y cambios en las políticas que más les afectan. Algunas protestas recibieron más atención que otras, pero la mayoría enfrentó la violenta represión por parte del estado. A pesar de los diferentes actores, las demandas, los efectos y la represión, la indiscutible conclusión es que las protestas sociales en Colombia se han convertido en una herramienta para la participación democrática. Más importante aún, la protesta como una herramienta democrática es probable que se mantenga y se fortalezca mientras la injusticia permanezca.

El sector de la minería en pequeña escala ha desempeñado un papel importante este año. El 2013 comenzó con la huelga de los mineros de carbón de la Guajira para obtener mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, seguida más tarde en julio por los mineros en todo el país que se movilizaron para mostrar la importancia del gremio. Los mineros colombianos protestan contra la política nacional de favorecer a las multinacionales en vez de proteger los intereses de los mineros artesanales y la potencial devastación en sus pueblos natales debido a las técnicas de extracción a gran escala. De hecho, la incidencia de la protesta social contra la minería a gran escala ha aumentado en la última década y ha recibido el apoyo de la población fuera de la minería de pequeña escala. A pesar de la represión, la protesta nacional organizada marcó la siguiente resistencia por parte de la minería, que se enfrenta a una avalancha de conflictos sociales, minería a gran escala de sus territorios. La semana pasada, un líder de la comunidad quien se opuso abiertamente a las explotaciones mineras a cielo abierto fue muerto a tiros cerca de su casa en Tolima.

Los trabajadores rurales también desempeñan un importante papel en la protesta este año. En marzo, los campesinos de la región del Catatumbo abandonados por el estado protestaron contra la negligencia gubernamental y las políticas regresivas. El gobierno se comprometió a establecer una zona de reserva especial para los trabajadores rurales para aumentar su nivel de vida y establecer un conjunto de estudios técnicos para hacerlo. Un año más tarde, el estado no había concluido el proceso, y utilizó conclusiones de estudios técnicos para promover megaproyectos en la región (principalmente la extracción de

petróleo). Los manifestantes también condenaron las décadas de política aérea de erradicación de coca, que ha criminalizado a los campesinos, dañado los cultivos legales y deteriorado la salud de la población local. Los levantamientos en el Catatumbo resultaron ser quizás los más sangrientos, con cuatro manifestantes muertos y muchos más heridos. La reserva especial y la responsabilidad por las muertes no han sido establecidas.

La protesta más emblemática y generalizada del año se inició el 19 agosto, cuando varias organizaciones campesinas, movimientos estudiantiles y ciudadanos tomaron las calles de Colombia para protestar contra las duras condiciones económicas y políticas que los trabajadores agrícolas experimentan a diario. Estos movimientos exigen más ayuda del gobierno en cara a un mal negociado y perjudicial acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y Colombia y las mejoras en la remuneración de las personas que cultivan los alimentos que comemos diariamente. Conocida como la "huelga agraria", los manifestantes de agosto bloquearon caminos, protestaron en diversas regiones y pusieron a prueba la capacidad del gobierno para hacer frente a la desobediencia. Tal fue la magnitud de la movilización que el Presidente Juan Manuel Santos (de forma dudosa) ordenó la militarización de Bogotá el 30 de agosto. Lamentablemente, la policía fue brutal, gente murió (12, según los manifestantes) y algunas infraestructuras públicas y privadas fueron dañadas.

Por último, los movimientos indígenas convocaron a una "Minga Indígena" el 12 de octubre para demandar una respuesta a un conjunto de cuestiones que han comprometido su autonomía, que la constitución nacional y los instrumentos jurídicos internacionales protegen. En colaboración con estudiantes y organizaciones afrodescendientes, la Minga busca respuestas presidenciales sobre el hecho de que el 30% de la tierra prometida a los pueblos indígenas en el Cauca no había sido entregada. Del mismo modo, los grupos exigieron cambios en la minería y extracción de energía política y la inclusión indígena en las negociaciones de paz.

El conflicto armado ha permitido que el gobierno trate los pueblos indígenas como un chivo expiatorio: el estado continuamente bombardea tierras indígenas pretendiendo perseguir a grupos insurgentes. La verdadera intención, sin embargo, es asegurar y despoblar territorios de las industrias extractivas. Los grupos indígenas también han sido acusados de ayudar a las FARC, una afirmación que ha estigmatizado su legítima protesta y producido amenazas de muerte contra los manifestantes. De hecho, Amnistía Internacional advirtió sobre grupos paramilitares que amenazan los manifestantes de "limpieza social", ya que los grupos armados ilegales de derecha consideran a los manifestantes indígenas como "carne de cañón" de la guerrilla de las FARC. Amnistía también informó que en los disturbios la policía reprimió la movilización, hiriendo a 60 personas, 16 heridos graves y evitando que los manifestantes heridos de recibieran tratamiento médico por varias horas.

Todas estas protestas masivas son pruebas del descontento con la manera en que el gobierno trata a las poblaciones y diseña las políticas públicas relacionadas con la minería, la producción agrícola y el uso de la tierra y la gestión. Las personas están furiosas por las políticas represivas que favorecen a quienes cuentan con acceso directo al poder y perjudican a los trabajadores. Las personas también están indignadas por la falta de participación formal. Es por ello que hemos tomado las calles e incluso resistido la represión violenta. El costo humano ha sido de un valor incalculable, ya que han muerto personas y miles han resultado heridas, pero la tenacidad de estas manifestaciones muestra que la gente está dispuesta a luchar por sus derechos y están dispuestos al cambio.

### **La protesta social como la participación democrática**

Colombia ha experimentado aproximadamente un 50 por ciento de abstención en el voto desde 1998. Evidentemente, la vitalidad de la democracia colombiana no está en las urnas electorales, es en la calle. Los movimientos sociales utilizan las protestas para expresar su descontento con las políticas y las leyes y exigir un cambio, la atención y la justicia. Las protestas no son ideales en sí mismas, pero son el medio por el cual las personas sin acceso directo al poder y a la toma de decisiones hacen visibles sus opiniones y la demanda de que se respeten sus derechos.

El ideal absoluto sería una estructura de poder igualitaria que suprima la explotación, la opresión y promueva la liberación para todos los colombianos. Sin embargo, en nuestra situación actual, donde los miembros del Congreso no hacen su trabajo con el fin de conseguir dinero fácil, mientras que las madres comunitarias ni siquiera pueden conseguir protecciones laborales por su duro trabajo, la protesta social es la más sensata para alcanzar el sueño democrático y el acceso a beneficios del gobierno. Por estas razones, la protesta social debe ser protegida.

El 2013 ha sido el año de un número sin precedentes de protestas en Colombia. Sin embargo, este año podría no ser el último para ver ese aumento de la multiplicidad de actores y el número de los participantes. El 2013 puede ser el inicio de una profundas y generalizadas prácticas democráticas.